

Acuerdo de 13 de mayo de 2021, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación “Gestión del centro de atención a personas mayores dependientes (residencia y centro de día) Isabel la Católica de Madrid” de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, número de expediente 042/2020.

Con fecha 3 de abril de 2021, se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación legal de la empresa Aralia Serviciosanitarios, S.A., formulando recurso especial en materia de contratación, contra la Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad por la que se acuerda excluir a la recurrente del procedimiento de licitación por no quedar justificada su oferta incurso en valores anormales o desproporcionados.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita la suspensión del proceso de adjudicación de la licitación hasta que se resuelva alegando que *“aún está pendiente la adjudicación definitiva del contrato y por poder suponer, la eventual estimación del recurso, la anulación de los trámites posteriores a la exclusión de mi representada, con el consiguiente perjuicio para el licitador cuya oferta resultase elegida y para la propia Administración contratante, que se evitarían mediante la suspensión del expediente de contratación en el estado en que se encuentra, además de que, una posible adjudicación sin resolución de este recurso sería igualmente recurrida por mi mandante determinando, al amparo del art. 53 de la Ley 9/2017, la suspensión de la tramitación del procedimiento”*.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto



recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

El 5 de mayo 2021, el órgano de contratación recibió la solicitud de envío a este Tribunal del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. El 11 de mayo el órgano de contratación remitió dicha documentación solicitando en cuanto a la suspensión del procedimiento *que “hay que poner de manifiesto que el día 16 de abril de 2021 se requirió a ARQUISOCIAL, S.L. la documentación como propuesta adjudicataria, en base al artículo 150.2 de la LCSP. Esta documentación se presentó por ARQUISOCIAL el día 30 de abril de 2021. En aras a compatibilizar, de un lado la tramitación del expediente generando el mínimo de interferencias y por otro, garantizar que no se adopta ningún acuerdo del órgano de contratación que pueda perjudicar a la recurrente, se solicita al Tribunal la continuación del procedimiento hasta el momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato, pudiéndose examinar por la mesa de contratación la documentación de la ARQUISOCIAL”*.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.



Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, como es la exclusión del procedimiento de la recurrente.

Entiende este Tribunal que la medida cautelar de suspensión tiene carácter excepcional, dado que la tramitación del expediente de contratación solo se suspende automáticamente en el supuesto de que el acto recurrido sea la resolución de adjudicación como prevé expresamente el artículo 53 de la LCSP. Por ello teniendo en cuenta que en el presente caso no se va a dar una situación jurídica irreversible, puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.6 de la



LCSP *“La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración”*, y que no es previsible que se puedan producir perjuicios irreparables en los intereses de los licitadores, se considera procedente que el órgano de contratación pueda continuar la tramitación administrativa del procedimiento hasta el momento inmediato anterior a la adjudicación del contrato. Así se estima esta medida cautelar compatible con la finalidad que tiene el recurso especial en materia de contratación de obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato, y minimizando los posibles perjuicios para las partes intervinientes en el contrato, y que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato “Gestión del centro de atención a personas mayores dependientes (residencia y centro de día) Isabel la Católica de Madrid” de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, número de expediente 042/2020, a partir del momento inmediatamente anterior a la adjudicación del contrato, sin que el órgano de contratación pueda decidir sobre la misma hasta que este Tribunal haya resuelto sobre el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

